

(Especial para "El Nacional")

Atendiendo a sugerencias de amables lectores, ensayaremos hoy de definir un término cuya precisa significación no ha sido captada por muchos, no obstante su uso corriente en la prensa: ¿qué se entiende por royalty petrolero?

Entre nosotros, a diferencia de otros países, el sub-suelo ha sido siempre considerado como propiedad de la Nación o de los Estados, aunque en nuestras Constituciones —una entre tantas deficiencias que las ha caracterizado en su desarrollo histórico— no se haya establecido nada concreto al respecto. Esa tradición se origina en el hecho de que durante la dominación española la propiedad del suelo y del sub-suelo las detentaba el Rey. Al independizarnos, nuestra Nación heredó la propiedad del sub-suelo, limitándose a reconocer y garantizar la del suelo a quienes, para aquella época, ostentaran un título sin inquirir la procedencia del mismo, por lo que a la Nación pasó la propiedad de las tierras no apropiadas —los baldíos—, que entraron a formar parte de su patrimonio junto con las que por una u otra forma de transmisión adquirió con posterioridad.

En esa propiedad de la Nación o de los Estados sobre el sub-suelo, se ha basado nuestro Derecho minero y, por consiguiente, regido como principio en la legislación especial sobre hidrocarburos. Se ha basado, además, en ese principio el sistema de concesiones, o sea, el otorgamiento que la Nación hace a particulares del derecho de explorar un área determinada del territorio y de explotar por un tiempo determinado el petróleo que se encuentre en ella, conforme a condiciones que en la Ley se establecen y reservándose para sí una parte del petróleo que se extraiga. Esa parte es lo que se llama royalty o regalía, lo que no es ni un impuesto ni una porción de los beneficios que puedan derivarse de las operaciones que realiza el concesionario, como impropriamente se ha interpretado. Insistimos para mayor claridad: El royalty petrolero —de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos— lo integran los 16 barriles y dos tercios de cada 100 de petróleo que extraiga el concesionario y, por tanto, es la parte de su riqueza petrolera que la Nación se reserva para sí al otorgar la concesión.

La Ley de Hidrocarburos que es la misma del 43 con ligeras modificaciones introducidas en 1956, en su Artículo 3 establece:

"El derecho de explorar con carácter exclusivo, y el de explotar, manufacturar o refinar y transportar por vías especiales las sustancias a que se refiere el artículo 1º, podrá ejercerse directamente por el Ejecutivo Nacional u obtenerse por medio de concesiones que éste otorgue conforme a la presente Ley. Las concesiones de exploración y explotación y las de explotación no confieren la propiedad de los yacimientos, sino el derecho real inmueble de explorar el área concedida y de explotar, por tiempo determinado, los yacimientos que se encuentren en ella, de acuerdo con esta ley y con el título de la concesión. Este derecho puede ser objeto de hipoteca".

Como se observará, la Ley no declara concretamente que el yacimiento petrolero es pro

propiedad de la Nación o de los Estados, pero sí indirectamente al estatuir que la concesión no otorga al concesionario el derecho de propiedad sobre el yacimiento, lo que en definitiva viene a ser lo mismo. Por eso es que siempre hemos creído que la Constitución debería ^{ser} enriquecida con postulados rotundos sobre los derechos de la Nación en esa materia como en otras, imprimiéndole a los articulados que los consagra^{an} más importancia si se quiere, que los relativos a principios de contenido democrático formal. Si ese derecho hubiera sido consagrado en nuestra Constitución quien sabe si no hubieran podido realizarse las entregas, los regalos que de nuestras riquezas naturales han sido hechos a los trusts internacionales. Junto con la consagración de ese derecho en la Constitución, necesariamente hubieran tenido que establecerse normas para la defensa de esas riquezas, para su aprovechamiento y conservación, todo lo cual hubiera hecho más difícil el saqueo que hemos sufrido. No hubieran podido dictar fallos los Tribunales con los que so-pretexto de la "defensa de derechos adquiridos por particulares", se ha ocasionado graves perjuicios a los intereses nacionales.

Impropiamente la Ley de Hidrocarburos, repitiendo un viejo error originado en las deficiencias de nuestra Constitución ya anotadas, califica al royalty de "impuesto de explotación". El impuesto, sea directo o indirecto, lo paga el ciudadano al Estado como tributo o carga para cubrir los gastos que origine la organización, mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos, para atender a la defensa nacional, a actividades culturales, sanitarias, etc, así como contribución compensatoria por ventajas especiales que disfruta el contribuyente.

Estas condiciones no se reúnen en el royalty. En cambio sí las identificamos en los impuestos de exploración, de superficie, etc que pagan^{los} ~~los~~ concesionarios petroleros, especialmente la última, ya que por la exclusividad de extraer y manipular petróleo obtienen una ventaja especial que les produce pingües beneficios. El royalty, el cual a su elección el Ejecutivo Nacional puede percibir en especie o vender al concesionario, es una parte de la riqueza nacional independiente del resto de petróleo extraído que al ser transportado, ~~manipulado~~ manipulado y vendido por el concesionario da origen a los beneficios o utilidades. Cuando más podría argumentarse que sobre el concesionario pesa la carga de correr con los gastos que pudiera originar la extracción de los 16 barriles y dos tercios del royalty, como una de las compensaciones a la concesión que se le ha otorgado de disponer en exclusividad de 83 barriles y un tercio de cada 100 extraídos.

Es absurdo, inaceptable que la Nación reciba una parte de su propia riqueza en pago de los servicios que el Estado presta al concesionario o como compensación por las ventajas obtenidas con la concesión. El royalty es la parte de la riqueza nacional a la que la Nación no ha renunciado, ni cedido ni traspasado al otorgar la concesión, ~~de~~ que no se renueva ni amortiza, en contraste con el capital de las compañías que sí amortizan, multiplican, etc.

El esclarecimiento de este concepto deriva su importancia del hecho de que él condiciona las relaciones del Estado con las empresas petroleras, así como la estimación de la participación a que tiene derecho la Nación en los beneficios provenientes de la explotación del petróleo.

La repartición mitad y mitad -el 50-50- de los beneficios de las empresas, la hemos calificado de mito ("El Nacional" 6, 21 y 28/12/58) precisamente porque en el acuerdo o arreglo secreto que la estableció, al considerar al royalty incluido en la parte de la Nación, se redujo proporcionalmente la participación de ésta en los beneficios, en perjuicio de los intereses nacionales. Los beneficios los obtienen las empresas en la manipulación y venta de los 33 barriles y dos tercios y son ~~esos~~^{esos} beneficios los que deben repartirse entre Nación y empresas. Al considerar al royalty incluido en el reparto mitad y mitad condujo a otra monstruosa complacencia, la de que las empresas petroleras no pagaran el impuesto del "5 por mil" porque de realizar ese pago Venezuela hubiera percibido más del 50% de los beneficios. Un economista amigo nos informó que por ese motivo las compañías dejaron de pagar 120 millones en el solo año de 1957.

No más acuerdos secretos con las compañías petroleras ni de hierro. La Nación debe mantener su independencia soberana de establecer su régimen impositivo de acuerdo con los intereses nacionales y las condiciones que priven en cada momento, sin dejarse marear por fórmulas mágicas.